

C.A. de Santiago

Santiago, nueve de junio de dos mil veintiuno.

VISTOS:

En estos autos RIT 630-2019, RUC N° 1300355101-0, del Segundo Tribunal del Juicio Oral en lo Penal de Santiago, por sentencia de seis de abril de dos mil veintiuno, se condena a **Jorge Adrián Aranda Aranda**, en lo que interesa respecto de este recurso de nulidad, de la siguiente manera:

I.- Previa recalificación, a ochocientos veinte (820) días de presidio menor en su grado medio, más las accesorias de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena y a una multa de once (11) Unidades Tributarias Mensuales, sin parcialidades y accesorias que corresponden, como autor de un delito reiterado de uso malicioso de instrumento privado falso, en grado consumado, perpetrado por él los días 20 de marzo, 4 y 5 de abril, todos del año 2013, en perjuicio de la Ilustre Municipalidad de Quilicura, Metalúrgica Industrial Tobalaba S.A., Banco BCI y Banco BICE, en las comunas de Conchalí, Recoleta y Estación Central.

II.- Que se autoriza a pagar la multa impuesta al sentenciado Aranda Aranda, en once mensualidades sucesivas, la cual deberá ingresarse en arcas fiscales dentro del término de los cinco primeros días de cada mes, contados desde el mes siguiente a la fecha en que quede ejecutoriada la presente sentencia, bajo apercibimiento que la falta de pago de una sola de dichas cuotas, hará exigible de inmediato el total del saldo de la multa o su substitución, de acuerdo a lo previsto en el artículo 49 del Código Penal, de la manera favorable para el sentenciado.

III.- Que, atendido que el condenado no cumple con los requisitos del artículo 4°, 8° y 15 de la Ley 18.216, vigente a la época de los hechos, no procede concederle ningún beneficio alternativo al cumplimiento de la condena, debiendo dar cumplimiento efectivo de la misma, reconociéndosele como abono a su favor los días que permaneció privado de libertad con motivo de esta causa.

En contra de esa sentencia, y en representación del sentenciado, recurre de nulidad el defensor penal público don Cristián Farias Concha, fundado en la causal del artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal,



interponiendo en subsidio recurso de apelación de conformidad con lo que se dispone en el artículo 37 inciso segundo de la Ley 18.216.

La vista de la causa se llevó a efecto el 24 de mayo de 2021, oportunidad en que alegaron ante esta Corte ambos intervinientes, fijándose esta audiencia para la lectura del fallo, señalándose desde ya que para los efectos del antes referido recurso de apelación se debe estar a lo que se dispone en el antes artículo 37 de la Ley 18.216.

CONSIDERANDO:

Primero: Que la recurrente invoca la causal de nulidad prevista en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, por errónea aplicación del derecho que habría influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, por aplicación errónea de los artículo 198, en relación con los artículos 193 números 1 y 2, como también el 197, todos del Código Penal.

En fundamento de esa infracción, la recurrente señala que los cheques o documentos que fueron utilizados para los efectos de la configuración de los delitos que se le imputan, constituyen una construcción total de documentos y no de partes de ellos, situación o hipótesis que no se contempla en nuestra legislación, por lo tanto a contrario de lo que interpreta el segundo tribunal oral en lo penal, entiende la defensa que nos encontramos frente a hechos que no se enmarcan en ninguno de los artículos que se indican en la sentencia, toda vez que la figura no se encuentra contemplada en el Código Penal y en particular, en los artículos de los artículo 198, en relación con los artículos 193 números 1 y 2, como también el 197, todos del Código Penal, existiendo por ello una errónea aplicación del derecho.

En relación con lo mismo, la recurrente agrega que los cheques respecto de los cuales se hizo un uso malicioso, se trataría de una falsa representación de esos documentos, dado que no tendrían todas las seguridades propias de los cheques, si no algunas de ellas, además del respectivo fingimientos de las firmas estampadas en los mismos, con lo cual no se darían las hipótesis de falsificación que se invocan en la sentencia recurrida, que serían las de los números 1 y 2 del artículo 193 del Código Penal, aplicables a los documentos privados en virtud de lo que se establece en el artículo 197 del mismo texto legal, disposiciones estas últimas que se



refieren a los documentos que se entienden falsificados, respecto de los cuales se castiga el uso malicioso de los mismos en el artículo 198 del Código Penal.

Con motivo de ello, la recurrente señala que los cheques fueron falsificados mediante un sistema de reproducción digitalizado de inyección de tintas y utilización de un lápiz especial con tinta invisible ultravioleta, con el objetivo de simular el elemento de seguridad del documento, creándose una falsa representación de la realidad, por lo tanto entiende la defensa que si bien es cierto el tribunal recalificó la figura delictiva al delito de uso malicioso de instrumento privado, desde la figura delictiva de falsificación de instrumentos privados mercantiles que se tipifica en el artículo 197 inciso 1, en relación al 193 N°1 y N°2, ambos del Código Penal, la dinámica de los hechos, no se enmarcaría en ninguna de las hipótesis establecidas en los artículos anteriormente singularizados, los cuales hacen referencia a contrahacer, fingir letra, firma o rúbrica, por lo tanto hacen referencia a una parte de un documento privado, a la letra, firma o rúbrica, situación que no se da en la especie y en el caso en comento, dado que se trata de una falsa representación de un documento, por lo tanto malamente se puede entender que se cumple con las hipótesis de falsificación que se señalan en los numerales 1 y 2 del antes aludido artículo 193 del Código Penal, ya que de la narración de los peritos presentados por la fiscalía se desprende que es una construcción total de un documento y no de partes de ellos, motivo por el cual no procedería que sea condenado el señor Jorge Aranda.

Segundo: Que las alegaciones de la parte recurrente, queda claro que giran en torno a que los cheques respecto de los cuales se hizo uso malicioso por el condenado, no tendrían el carácter de documentos falsificados al tenor de lo que se establece en los números 1 y 2 del artículo 193 del Código Penal, por lo que se hace necesario como cuestión previa al análisis del recurso, revisar lo que se señala en la sentencia recurrida al respecto y en particular en el considerando duodécimo de la misma, en el cual el tribunal a quo apoyado en la prueba rendida y especialmente en dos peritajes, llega a la siguiente conclusión: *“....Que, los hechos que se han dado por probados configuran dos delitos de Uso Malicioso de Instrumento Privado Falsificado, previsto en el artículo 198 del Código Penal, en relación con el artículo 193*



Nº 1 y 2 y 197 del mismo cuerpo legal, todos en grado de consumado, toda vez que resultó acreditado que se fingió o contra hizo la firma de la titular de la cuenta corriente, en once documentos que tenían la apariencia de cheques, y, que un tercero los presentó a cobro, logrando el pago efectivo de las cantidades por las que estaban suscritos, provocando un perjuicio equivalente al monto por el cual cada uno de ellos fue emitido....”.

Tercero: Que en cuanto a las disposiciones que el recurrente señala que se infringieron con motivo de la dictación de la sentencia recurrida, en lo relevante respecto de este recurso, el artículo 198 del Código Penal señala que: “El que *maliciosamente* *hiciera* uso de los instrumentos falsos a que se refiere el artículo anterior, será castigado como si fuera autor de la falsedad”. A su vez, en el artículo 197 de ese texto legal, se establece que: “El que, con perjuicio de tercero, cometiere en instrumento privado alguna de las falsedades designadas en el artículo 193, sufrirá las penas de ...” En el inciso segundo del mismo artículo, se señala que: “Si tales falsedades se hubieren cometido en letras de cambio u otra clase de documentos mercantiles, se castigará a los culpables con presidio menor en su grado máximo y multa...”.

Cuarto: Que en este caso, se condenó al recurrente en virtud del uso malicioso de instrumentos a que se hace referencia en la hipótesis que se describe en el inciso 1 del artículo 197 del Código Penal, teniendo en cuenta que la falsedad se realiza en instrumentos privados, debiendo entenderse por este último “todo aquel que siendo escrito, no es documento público u oficial, siendo una noción residual a la que se llega por descarte” (Garrido Mario, Derecho Penal, Tomo IV, pag. 87, cuarta edición). En ese sentido, si se pudiere poner en duda que los documentos falsificados fueren cheques u órdenes de pago, como corresponde a la naturaleza de los cheques, lo que pudiere controvertir es la aplicación de la figura típica del inciso 2 del antes referido art. 197 del Código Penal, pero lo que no se puede poner en duda es que se trata de instrumentos privados y por ende se aplica el inciso 1 de ese artículo 197 del Código Penal, como se hace efectivamente en la sentencia recurrida.

En relación con lo mismo, en la sentencia recurrida se discurre correctamente al respecto, lo siguiente: “....Lo anterior lleva a sostener que la falsificación de letras de cambio y de documentos mercantiles en el sistema



penal nacional es sólo una modalidad especial de la falsificación de documentos privados, lo que, sin duda, reviste una consecuencia importante en el sentido de que las características del tipo objetivo y subjetivo del delito de falsificación de instrumento privado, rige en plenitud respecto de este tipo de títulos de crédito. Dicha semejanza, se desprende del tenor literal del artículo 197 al señalar *“si tales falsedades sobre papel de seguridad, pero ese era el único elemento que tenían respecto de aquellos que presentan los cheques y concluyeron que eran falso, o sea, no se trataba de cheques. No se desconoce que fueron cancelados, y que su parecido o similitud permitió que en Servipag se pagaran, pero no se trataba de un documento mercantil original o genuino al cual le hubieran sido erradicadas las menciones y hubiesen sido modificadas y alteradas...”*.

Quinto: Que en relación con lo que señala el recurrente, respecto de que no se darían los presupuestos de los números 1 y 2 del artículo 193 del Código Penal, dado que esas disposiciones se refieren a una parte de los documentos falsificados y no a la construcción de la totalidad de los mismos como acontecería en la especie, ello no es procedente, especialmente si se tiene en consideración que por instrumento se debe entender “todo escrito en que se consigna un hecho” (Mario Casarino, Manual de Derecho Procesal, Tomo IV, Cuarta Edición, pag 93). En este caso, en los instrumentos utilizados por el recurrente, se dejó establecido como hecho, una forma de disposición de dineros de cuentas corrientes de las que no era titular el sentenciado, los cuales no cabe ninguna duda que pueden ser calificados de instrumentos privados, en los cuales se contrahicieron o fingieron la firma o rúbrica de los titulares de esas cuentas corrientes o de los representantes de estos últimos y además se supuso la intervención de personas que no lo hicieron, con lo cual se dan los supuestos de falsificación establecidos en los antes referidos números 1 y 2 del artículo 193 del Código Penal, lo que viene en desvirtuar la alegación de la recurrente al respecto.

Sexto: Que por lo antes señalado, se puede concluir que en la sentencia recurrida no se ha hecho una incorrecta aplicación del derecho, como se pretende por la recurrente, en el recurso de nulidad a que se refiere esta sentencia. Muy por el contrario, en este caso se ha hecho una correcta aplicación de las disposiciones que se señalan como infringidas, sin que se



configure la causal de nulidad por el invocada, esto es, la prevista en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, lo que lleva al rechazo del recurso intentado por la defensa del acusado Aranda Aranda.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto por los artículos 372, 376 y 384 del Código Procesal Penal, se **rechaza el recurso de nulidad** interpuesto por el defensor penal público en representación de **Jorge Adrián Aranda Aranda**, contra de la sentencia dictada por el Segundo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, con fecha seis de abril de dos mil veintiuno, en los autos RIT 630-2019, RUC N° 1300355101-0.

Regístrese y comuníquese.

Redactó el abogado integrante señor Ovalle.

N°Penal-1663-2021.



Pronunciado por la Undécima Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Maria Loreto Gutierrez A., Jaime Balmaceda E. y Abogado Integrante Francisco Javier Ovalle A. Santiago, nueve de junio de dos mil veintiuno.

En Santiago, a nueve de junio de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

